

EL PARO DEL LUNES 17 DE MARZO Y EL GOBIERNO REPRESIVO



Para el día 17 de Octubre la Coordinadora Revolucionaria de Masas había convocado con una cierta precipitación y en pleno Estado de Sitio un gran paro laboral. Su finalidad más inmediata era la de protestar contra la creciente ola de represión que para esos días alcanzaba la espantosa cifra de 700 muertos en lo que va de año. Esta finalidad era lo suficientemente grave como para justificar el paro general y así lo anunció Mons. Romero en su homilía del domingo 16. Pero el paro, además de esta intención justísima, tenía también una intencionalidad política: la de demostrar que la represión, en vez de intimidar a las organizaciones populares, las estaba robusteciendo; y la de rechazar la posición del actual Gobierno que necesita de la represión violenta para llevar adelante sus reformas, unas reformas que por diversos capítulos no son aceptables para las organizaciones populares.

El Estado de Sitio y la desinformación a la que nos tienen sometidos tanto los comunicados oficiales como la mayor parte de nuestros medios de comunicación, no permiten todavía medir con objetividad el alcance del paro nacional. Radios extranjeras han hablado de un 70 % de paro, lo cual sería ciertamente una proporción altísima, que podría estimarse como un triunfo notable. Aun restando los establecimientos que cerraron por temor tanto de las acciones de la izquierda como las que implementó la derecha y el Gobierno en la madrugada del propio lunes, no puede negarse que la fuerza demostrada por la Coordinadora en el campo estrictamente laboral fue grande. La Coordinadora no es sólo fuerte en el campo sino también en la fábrica y en la ciudad.

Es muy probable que se cometieran errores. En una primera convocatoria conjunta hubiera sido deseable que se les uniesen más sindicatos de los que maneja directamente la Coordinadora, y hubiera sido deseable que se evitase lo más posible cualquier forma de violencia, lo cual hubiera convertido al paro en una especie de referéndum laboral, que hubiera servido para medir la aceptación con que este tipo de medidas puede contar. Pero a pesar de estos fallos, puede estimarse que el paro fue



un avance en la lucha popular. El Gobierno y la derecha pueden mover a unos miles de uniformados, pero la izquierda puede paralizar la actividad económica del país. Y esto que todavía no se ha consumado la unidad de los trabajadores, ni se ha conseguido una organización adecuada de sus fuerzas.

La respuesta del Gobierno al paro en sí fue dura. No sólo el patrullaje de las ciudades y el tiroteo contra la Universidad de El Salvador así lo demuestran, sino sobre todo las muertes que ocasionaron. No menos de 10 obreros fueron muertos en las fábricas en paro por agentes de los Cuerpos de Seguridad; e incluso tres trabajadores de la Alcaldía aparecieron asesinados, después de haber sido detenidos por agentes de la Policía de Hacienda, según protesta de la propia Alcaldía capitalina.

Pero a estas muertes se unieron en el mismo día otras hasta llegar a un mínimo de sesenta según algunos y hasta sobrepasar las ciento cuarenta según informadores internacionales. Y es que el paro laboral fue acompañado en el campo de algunas actividades combativas por parte de las organizaciones populares: tal es el caso de lo ocurrido en Colima y en la carretera de San Martín a Suchitoto. Puede dudarse de la conveniencia táctica de juntar un paro laboral con esta serie de actividades combativas, pero esta posible inconveniencia táctica no justifica la acción represiva del Gobierno.

Se dice que en Colima miembros de la UCS, afectos al FAPU, intentaron tomar la hacienda, después de dar muerte a dos de sus ocupantes. Acudió la Fuerza Armada y dió muerte al menos a 18 campesinos indefensos; tanto la falta de bajas en los Cuerpos de Seguridad como el documento de la televisión y la narración de los testigos, permite hablar de una verdadera masacre y de ningún modo de un enfrentamiento armado; algo que está en la misma línea de lo que viene haciendo este Gobierno desde primeros de Enero, cuya cuenta está en números rojos con más de 700 muertos.



Algo parecido debe decirse de lo ocurrido en la carretera de Suchitoto, aunque aquí los Cuerpos de Seguridad reconocen haber tenido una víctima, por lo que si es cierto -no lo fue en el caso de la toma violenta de la sede del Partido Demócrata Cristiano- podría hablarse de enfrentamiento, pro de enfrentamiento desigual y abusivo como lo muestran el número de víctimas de sus adversarios, no menos de 12.

De estos hechos tanto la Junta de Gobierno en su rueda de prensa como el Comité de Prensa de la Fuerza Armada dan versiones y, sobre todo, interpretaciones poco verosímiles y aun deformantes. Decir que Amnistía Internacional está mal informada, cuando habla de la represión en El Salvador, es querer quitar credibilidad a una Institución,, galardonada con el Nobel de la Paz, y en la que antes se apoyaron los que ahora quieren deslegitimarla. La teoría de lo que es represión y de lo que no lo es, expresada por los miembros de la Junta, no hace sino hacerlos plenamente responsables de las setecientas muertes ocurridas en el país a manos de los Cuerpos de Seguridad y de los grupos para-militares; hasta ahora se disculpabandixen diciendo que cincuenta años de represión no pueden sanearse en unos meses, pero ahora resulta que no es represión lo que hacen -fuera de algunos excesos- sino conservar el orden. Peor aún es el caso de los comunicados del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, que apenas se diferencian en nada de lo que se decía en tiempos de Romero cuando las masacres de El Despertar, de Catedral, etc.

Todo este conjunto de hechos demuestra una poralización no entre la extrema derecha y la extrema izquierda, sino simplemente entre la izquierda y el Gobierno, entre la izquierda y la Fuerza Armada. Es aquí donde falla lamentablemente el análisis político de la realidad nacional, tal como es formulado por lo que ha quedado de la Democracia cristiána -reconocerán que han perdido a sus mejores analistas políticos- y tal como es expresado por la Fuerza Armada. Mientras se siga sosteniendo que la Coordinadora es un refugio de subversivos, deseosos de sangre y de ser reprimidos para conseguir víctimas, sólo ~~xxx~~ se darán macabros pasos represivos que conducen



al país no tanto a una guerra civil sino a un holocausto de las organizaciones populares. Pero un holocausto que puede durar diez años o más, lo cual causaría la destrucción total de El Salvador.

Ciertamente la Coordinadora tiene sus fallos y aun le queda mucho para convertirse en una alternativa coherente de poder revolucionario-democrático. Pero esos fallos no están en que sean subversivos o maleantes o resentidos sociales; están en que no se les permite un desarrollo político normal. Son perseguidos, masacrados, dificultados en sus labores sindicales, en sus labores de organización, en sus intentos de ampliar sus relaciones con otros grupos democráticos. Así lo que se va a conseguir es su radicalización y su desesperación. Es difícil en estas circunstancias que no lancen a actividades revolucionarias, a luchas combativas. Lo menos que se puede decir es que el país está viviendo una etapa pre-revolucionaria y de ningún modo una etapa de transición. La cuestión fundamental es cómo salir por el camino menos violento de esta etapa crítica. Y en este punto la responsabilidad mayor es la de los gobernantes civiles y, sobre todo, militares. Ojalá no se dejen cegar por lo que están haciendo de Reforma Agraria; puede ser un señuelo que les impida ver la totalidad del proceso.

19-Marzo-1980